



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLITICAS
CARRERA DE DERECHO**

TEMA:

**Propuesta de reforma del Código Orgánico General de
Procesos para reincorporar la confesión judicial como
herramienta de defensa de los derechos laborales de los
trabajadores**

AUTOR:

Robalino Cueva Johan Sebastián

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR**

TUTOR:

Castro Chiriboga, Fernando Guillermo

Guayaquil, Ecuador

04 de septiembre de 2022



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLITICAS
CARRERA DE DERECHO**

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por **Johan Sebastián Robalino Cueva**, como requerimiento para la obtención del título de **ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR**.

TUTOR

f. _____

Chiriboga Castro, Fernando Guillermo

DECANO DE LA FACULTAD

f. _____

Dr. Leopoldo Xavier Zavala Egas

Guayaquil, a los 04 días del mes de septiembre del año 2022



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
CARRERA DE DERECHO**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, Robalino Cueva Johan Sebastián

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación: Propuesta de reforma del Código Orgánico General de Procesos para reincorporar la confesión judicial como herramienta de defensa de los derechos laborales de los trabajadores, previo a la obtención del título de ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 04 días del mes de septiembre del año 2022

EL AUTOR

f. _____

Robalino Cueva, Johan Sebastián



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
CARRERA DE DERECHO**

AUTORIZACIÓN

Yo, Robalino Cueva Johan Sebastián

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la publicación en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, Propuesta de reforma del Código Orgánico General de Procesos para reincorporar la confesión judicial como herramienta de defensa de los derechos laborales de los trabajadores, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

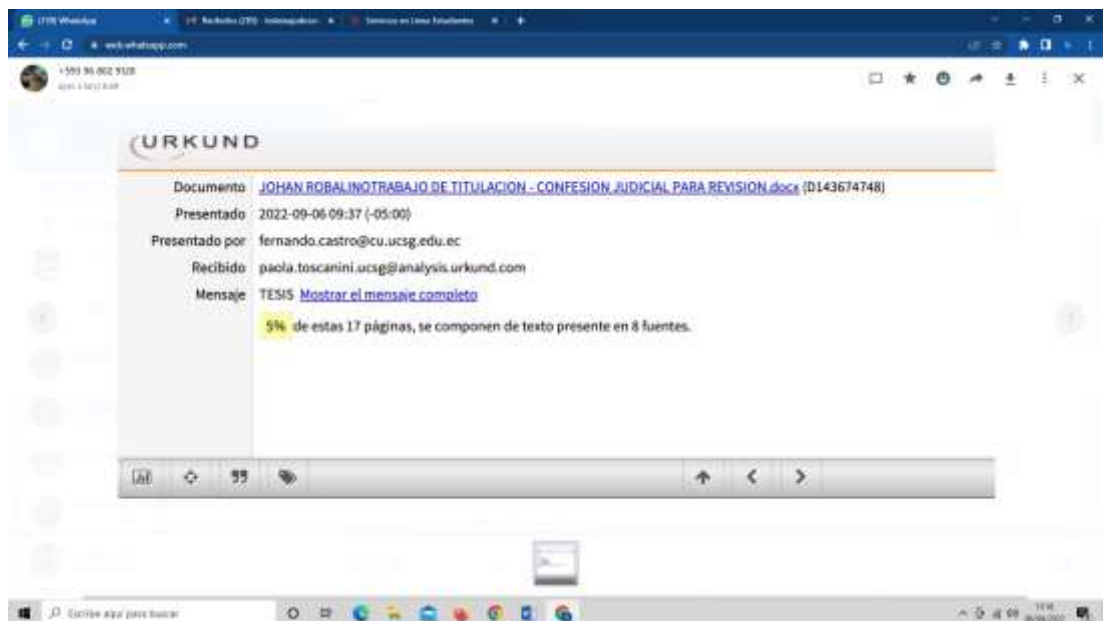
Guayaquil, a los 04 días del mes de septiembre del año 2022

EL AUTOR:

f. _____

Robalino Cueva, Johan Sebastian

REPORTE URKUND



TUTOR

f. _____

Chiriboga Castro, Fernando Guillermo

EL AUTOR:

f. _____

Robalino Cueva, Johan Sebastián



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLITICAS
CARRERA DE DERECHO**

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____
DR. LEOPOLDO XAVIER ZAVALA EGAS
DECANO DE LA FACULTAD

f. _____
AB. ÁNGELA MARIA PAREDES CAVERO, MGS.
COORDINADOR DEL ÁREA

f. _____
AB., ALEXANDRA RUANO SANCHEZ.
OPONENTE

ÍNDICE

Resumen	VIII
Abstract.....	IX
Introducción	2
Capítulo I.- Fundamento de hecho.....	3
Antecedentes histórico-jurídicos.....	3
Fenómeno jurídico.....	7
Capítulo II.- Fundamento de derecho	11
Identificación del problema.....	11
Causas del problema jurídico	13
Preguntas de investigación	14
Análisis del problema jurídico general.....	15
Análisis del problema jurídico específico (laboral).....	17
Propuesta de solución del problema jurídico.....	19
Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos.	20
Conclusiones	23
Recomendación	24
Referencias.....	25

RESUMEN

El trabajo tuvo como finalidad proponer una reforma al Código Orgánico General de Procesos para la reincorporación de la confesión judicial como herramienta de defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Esto se justificó por el hecho de la desaparición de la institución de la confesión judicial a partir del año 2015 cuando se derogó el Código de Procedimiento Civil. El estudio se presenta, aparte de como una propuesta de reforma a una normativa tan importancia como lo es el Código Orgánico General de Procesos, como una novedad dentro de los estudios académicos en la rama del Derecho Laboral por pretender dar pertinencia a la inclusión de la confesión judicial sin provocar por ello la desaparición de la declaración de parte, figura que desde el 2015 funge como sustituto de la mencionada confesión. Luego del análisis de doctrina, ley y jurisprudencia se pudo demostrar la pertinencia de una reforma que permita que la figura de la confesión judicial nazca a partir de ciertas especificidades en la ejecución de la declaración de parte.

Palabras clave: Código de Procedimiento Civil, Código Orgánico General de Procesos, Confesión Judicial, Declaración de Parte, Derecho Laboral, Reforma, Reintegración.

ABSTRACT

The purpose of the work was to propose a reform to the General Organic Code of Processes for the reincorporation of the judicial confession as a tool to defend the labor rights of workers. This was justified by the disappearance of the institution of judicial confession as of 2015 when the Code of Civil Procedure was repealed. The study is presented, apart from a proposal to reform a regulation as important as the General Organic Code of Processes, as a novelty within the academic studies in the field of Labor Law for pretending to give relevance to the inclusion of the judicial confession without causing the disappearance of the declaration of the party, a figure that since 2015 has served as a substitute for the aforementioned confession. After the analysis of doctrine, law and jurisprudence, it was possible to demonstrate the relevance of a reform that allows the figure of the judicial confession to be born from certain specificities in the execution of the declaration of the party.

Keywords: code of civil procedure, general organic code of processes, judicial confession, labor law, labor rights, party statement, reform, reintegration.

INTRODUCCIÓN

En el Ecuador, la confesión judicial fue una institución que permitía la declaración de una persona respecto a un hecho o un derecho que le involucraba y con el cual se asumía parcial o totalmente la responsabilidad ante el mismo. Esta figura estaba contemplada en el Código de Procedimiento Civil, normativa que fue derogada y sustituida por el Código Orgánico General de Procesos que, desde el 2015, instauró una nueva institución similar: la declaración de parte.

Aunque guarda similitud con la confesión judicial, la declaración de parte se vislumbra limitada en ciertos aspectos, sobre todo en materia de Derecho Laboral. En esta rama del Derecho, la confesión judicial puede representar una gran utilidad como herramienta de defensa de los derechos de los trabajadores que, por desigualdad en términos de poder y dinero, pueden ver en su figura una manera de equilibrar las diferencias previamente mencionadas.

Así, la necesidad de reintegrar la confesión judicial a la normativa de procedimiento civil en el Ecuador se percibe como necesaria, aunque esto debe cimentarse en una amplia revisión doctrinal, análisis legal y otros de orden jurídico que puedan demostrar lo supuesto. A partir de esta necesidad surge el presente estudio, cuya finalidad será la de proponer una reforma al Código Orgánico General de Procesos para la reincorporación de la confesión judicial como herramienta de defensa de los derechos laborales de los trabajadores.

El trabajo se inicia con un análisis de los fundamentos de hecho, es decir, las circunstancias que originaron el problema jurídico; en ese apartado se expondrán los antecedentes histórico-jurídicos, el fenómeno jurídico y los elementos básicos del tema. Luego de ello se ubican los fundamentos de derechos, donde se identifica el problema específico y se analiza el problema jurídico respecto a cuestiones de vacío legal y consideraciones de diversos tratadistas, todo desde lo cual se cimentará la solución. Al final se ofrecerán las conclusiones y recomendaciones según los resultados de la propuesta de solución.

CAPÍTULO I.- FUNDAMENTO DE HECHO

Antecedentes histórico-jurídicos

La historia de la confesión judicial es ambigua, por cuanto no se ha realizado una sistematización sobre su uso y evolución dentro del Derecho. No existen claras referencias de sus primeros usos ni cómo esta se fue adaptando con el paso del tiempo a las necesidades de justicia de la sociedad. Foucault (2014) destacó que una de las referencias más antiguas sobre la confesión judicial se puede hallar en las obras de Homero, donde se exponen manifestaciones de verdad con la finalidad de resolver un litigio (p. 40). Para entonces (siglo VIII antes de Cristo), esta figura, no del todo delimitada, buscaba crear una especie de marco de verdad sobre un hecho a través del reconocimiento de una cuestión que, por su naturaleza, no era favorable para quien confesaba.

En la misma antigua Grecia se generaron los primeros avances formales, al menos desde la óptica filosófica, sobre la confesión en general. Aristóteles, en el año 499 antes de Cristo, señaló que a la confesión no se le podía adjudicar un valor probatorio de orden material por ser una cuestión personal y de tintes artificiales (Fernández González, 1999, p. 424). Las cavilaciones de este filósofo bien podrían asociarse más a una perspectiva de la confesión como una declaración de parte: tendría un valor dentro del proceso judicial, pero su valor probatorio debería corroborarse por encima del conformismo propio de asumir que, por venir de una persona perjudicada por su confesión, ya esta declaración es válida.

El Derecho Romano, fuente de innumerables elementos del Derecho hasta los días actuales, estructuró su propia versión de la confesión judicial, ello bajo la denominación de *confessio in iure*. Se encontró esta figura en el Lex Rubria de Gallia Cisalpina, fragmento de ley inscrito en bronce de la época republicana de la Antigua Roma (Sánchez Moreno, 2013, p. 1). Según lo encontrado en esta inscripción, el uso de la confesión judicial estaría limitado según ciertos contextos que no se podían conocer debido a la falta de mayor documentación sobre la Lex Rubria.

En la época justiniana del Derecho Romano, la figura de la confesión judicial se utilizó con la finalidad de reducir las controversias sobre ciertos hechos de un litigio. Según Bernad Segarra (2021) "...la confesión judicial, en época justiniana tiene como normal consecuencia el poner definitivamente fuera de discusión lo confesado" (p. 1286). De tal forma, para el período mencionado ya se le otorgaba a la confesión judicial un valor probatorio suficiente para que de ella se desprendiera la suficiente fuerza como para hacer que lo señalado por el confesante fuese alejado de toda duda. Naturalmente, este uso de la confesión judicial no necesariamente se mantendría a lo largo del tiempo.

En 1265, con el nacimiento de la Ley de las Siete Partidas española, se presentaban algunos requisitos básicos que debía tener toda confesión. En términos generales, las confesiones debían provenir de mayores de edad, ser espontáneas, conscientes, contra sí mismo, en juicio ante un juez competente, favorable al contrario y que no vaya en contra de la ley (Alvarado Velloso, 2009, p. 71). Esta especificación de condiciones en la confesión ciertamente modelaba gran parte de lo que se conocería en un futuro como confesión judicial y cuáles debían ser las características a tener en cuenta para su validez.

A mediados de los años 1400 la confesión judicial, o al menos un atisbo de ella, se mantenía presente en naciones como la España imperial o Italia. En estos países para aquel entonces, la cuasi confesión judicial se ofrecía ante un juez o un notario con la finalidad de activar cláusulas de compromisos en juicios sumarios y así propiciar la ejecución de ciertas obligaciones (Fairén Guillén, 2004, pp. 36-37). En estos casos, la parte que declaraba en su contra no lo hacía de manera absolutamente negativa para él, habiendo pues rasgos favorables que permitían, mediante su confesión, obtener beneficios en las instancias jurídicas. Es por ello que la confesión judicial, para aquel entonces, no era completa (cuasi confesión judicial), limitada a ciertos espacios y cuestiones litigiosas.

En el año 1532, en Alemania, surgió el Lex Carolina, cuerpo legal en donde se buscaba regular cuestiones relacionadas con la prueba, entre las cuales se encontraba la confesión judicial (Vásconez, 2020, p. 18). Este

conjunto de leyes resultaba de gran valor para aquel entonces como un avance de relevancia respecto al valor de las pruebas a través del uso de la fuerza, última que se empleaba por aquel entonces como elemento básico para obtener confesiones judiciales. Naturalmente, la tortura y otros métodos similares generaban confesiones judiciales que no podían ser tomadas en cuenta con toda la fuerza probatoria que hubiese tenido una confesión espontánea. De ahí que el Lex Carolina pretendiera no sólo regular el uso de la fuerza para tales confesiones, sino también delimitar que estas debían ser validadas, además de por lo mero dicho, por comparación con la realidad (Vásconez, 2020, p. 18).

Quizás el avance más significativo sobre la confesión judicial se produjo en el año 1806 de la mano del Código de Procedimientos Civiles de Francia. En este código se presentaban dos elementos básicos para toda confesión judicial: un pliego de posiciones que se construía sobre los hechos del juicio y, por otro, la comparecencia y declaraciones personales de la persona que confesaba (Benavente, 2004, p. 49). Es decir, se creaba una lista de hechos que se buscaban probar en el juicio, puntos que provenían de la parte interesada en que la otra confesara. Luego, se hacía un interrogatorio a la otra parte a raíz de esos hechos supuestos presentados por la parte que demandaba la confesión. Si la confesión se asociaba con los hechos del juicio, se generaba una situación en donde poco podía caber la duda sobre la veracidad de la cuestión al provenir de una confesión desfavorable para el confesante y favorable para el que exigía la confesión; un hecho que, de no ser representativo de la verdad, podía catalogarse como inverosímil cuanto menos.

El uso de la confesión judicial se extendió, a partir del último caso explicado, a diversas naciones de América con el paso del tiempo, tomándose además elementos del Derecho Romano y otros relacionados. En Ecuador, el último uso de la confesión judicial se evidenció en el Código de Procedimiento Civil (2005), cuerpo en donde constaba esta figura como parte de los actos preparatorios de un juicio (art. 64.1). La confesión judicial en este código mantenía la esencia funcional que se había asociado con esta figura en tiempos pasados: valor probatorio y cuya discusión, básicamente, no era

necesaria. Explícitamente, en el Código de Procedimiento Civil (2005) se establecía que esta figura era “...la declaración o reconocimiento que hace una persona, contra sí misma, de la verdad de un hecho o de la existencia de un derecho. La parte que solicite confesión presentará el correspondiente pliego de Posiciones, al que contestará el confesante” (art. 122). La última parte de esta exposición en la ley denota una clara similitud con el Código de Procedimientos Civiles de Francia del año 1806, explicado previamente en esta misma sección.

Como se pudo constatar de la definición anterior, la confesión judicial tendría un enfoque autoacusatorio: la persona que confiesa lo hace a sabiendas de que sus declaraciones van en contra de sus intereses, algo que se deslinda de la idoneidad de cualquier parte de un litigio. Ante la naturaleza de esta declaración en propia contra, resultaría intuitivo, como explica Vásconez (2020), que un juez deba considerar esta confesión como una verdad, por cuanto los efectos jurídicos perjudiciales que traería consigo no podrían tener sentido por el actuar de alguien que pretendía mentir en ella (p. 21). Ahora, este grado de entera verdad sólo podría adjudicársele a una confesión judicial en donde no existan elementos favorables para la persona que confiesa. En tales casos, no toda la declaración podría ser aseverada como un hecho que no deberá ser discutido, perdiendo así parte de su fuerza probatoria.

La confesión judicial se deslindó de la legislación ecuatoriana en el momento que fue sustituido por el Código Orgánico General de Procesos. En su lugar, se instauró una figura similar denominada declaración de parte. La declaración de parte es, según el Código Orgánico General de Procesos (2021), “el testimonio acerca de los hechos controvertidos, el derecho discutido o la existencia de un derecho rendido por una de las partes [...] Es indivisible en todo su contenido, excepto cuando exista otra prueba contra la parte favorable del declarante” (art. 187). Como es posible inferir, la declaración de parte no podría representar una evolución de la confesión judicial del Código de Procedimiento Civil; podría entenderse como una figura que añade ambigüedad, como se tratará más adelante, a esta clase de confesión.

Fenómeno jurídico

El último punto expuesto en la sección anterior presentó lo que en el Ecuador hoy día se conoce como declaración de parte en el Código Orgánico General de Procesos, que suplantó a la confesión judicial del Código de Procedimiento Civil. Aunque a la confesión judicial se le solía llamar indistintamente confesión judicial o declaración de parte (Núñez Landázuri, 2009, p. 107), existe un fenómeno jurídico que se infiere de la comparación de la nueva y la antigua institución: no son equivalentes.

En primer lugar, la confesión judicial se presentaba como una figura que podía ser actuada en las partes preparatorias a un juicio, tal y como ocurría con elementos como la confesión judicial o el reconocimiento de documentos (Código de Procedimiento Civil, 2005, art. 64). Por el contrario, la declaración de parte, su supuesto equivalente, tendría oportunidad de ser practicada directamente en el juicio, sea esto en la audiencia de juicio o en la segunda parte de una audiencia única (Código Orgánico General de Procesos, 2021, art. 188).

De esta realidad se desprendería un problema jurídico de consideración del valor probatorio de la declaración: mientras que la confesión judicial se daba en las instancias previas con la finalidad de dar valor probatorio a lo que se confesaba por aquel al que se le demandaba confesar, en la declaración esto no se tendría en tal estima, siendo así intempestivo el valor probatorio que se le pueda dar a la declaración en el caso que esta sea contraria a los intereses del confesante. Es decir, el fenómeno jurídico de la confesión, que antes podía ser evaluado por el juez antes del comienzo de una audiencia de juicio, ahora debería ser analizado para otorgarle una consecuencia de orden jurídico a la declaración que, por las características de la instancia de juicio, quizás no sea interpretada de la misma manera.

Lo que se explicó en el párrafo anterior se sustenta desde el entendimiento del fenómeno jurídico desde la perspectiva contencioso-no contencioso. Según Aboslaiman (2018) cuando un estado no contencioso deja de serlo y pasa a uno contencioso, en sí la estructura de este permanece (el fondo de la cuestión), pero muta sobre sus bases originales y hace que ello

deba tenerse en cuenta (p. 28). Esto, trasladado a la cuestión de confesión judicial, se podría ejemplificar de la siguiente manera: al momento de que una de las partes genera un pliego de posiciones y pide que la otra parte declare sobre ellas, ambas conservan, en ese instante, una esencia no contenciosa que se debe demostrar en el juicio. Cuando el confesante ciertamente confiesa su responsabilidad sobre alguno o todos los puntos del pliego de posiciones, se está declarando que, efectivamente, existe un asunto contencioso entre los involucrados, lo que plantea una forma de abordar el problema diferente. Si esto ocurre antes del inicio del juicio, el juez tendrá una postura diferente sobre el asunto (que habrá mutado por la confesión judicial) y que buscará comprender y decidir en el juicio. Si la confesión de parte se genera en pleno juicio, la mutabilidad del fenómeno jurídico sería in situ, complicando con ello el accionar del juez y, quien tendría menos tiempo para considerar los elementos relacionados a tal confesión.

Aparte de esta cuestión de índole procesal que por sí sola genera problemas respecto a la similitud entre la confesión judicial y la declaración de parte, se debe tener en cuenta los problemas de especificidad del valor probatorio de las dos figuras. La confesión de parte gozaba de un desarrollo pleno de las características que debían observarse para ser validada como prueba.

Específicamente, en el Código de Procedimiento Civil (2005) se señalaba de manera explícita que una confesión podía ser prueba siempre que fuera receptada por un juez competente, fuese explícita y que se centrara en los hechos que se preguntaban (art. 123). A diferencia de la confesión judicial, la declaración de parte posee elementos difusos, dado que en el Código Orgánico General de Procesos (2021) sólo se le considera como un testimonio de una de las partes sobre los hechos, así como se le adjudica la característica de indivisible siempre que no existan pruebas contra la parte favorable de lo declarado (art. 187). En ningún apartado de la declaración de parte se señala textualmente que esta tendrá un valor probatorio ni las condiciones específicas de plena favorabilidad para quien solicita la declaración. Con ello presente, quedaría en plena evidencia que la confesión judicial ya no existiría en la normativa procesal del Ecuador, y su supuesto

reemplazo, la declaración de parte, la cual no aborda únicamente hechos personales y cuyo valor probatorio no es explícito e indefectible, a diferencia de lo que sí ocurría con la confesión judicial.

Desde la postura particular del autor de este documento, el fenómeno jurídico a atenderse, aparte de los rasgos contenciosos y no contenciosos que fueron señalados con anterioridad, tendría una caracterización primaria. Para contextualizar la postura, ha de destacarse que un fenómeno jurídico primario es el que deriva de leyes (entre otros de orden superior) y que del cual se generan fenómenos secundarios, en clara existencia de causalidad (Aboslaiman, 2018, p. 27). Sobre los cimientos de esta clase de fenómenos, la extirpación de la confesión judicial de la normativa procesal ecuatoriana generaría problemas diversos en todos aquellos casos en donde su figura resultaba funcional y positiva para la atención efectiva de las disputas entre las partes. Esta realidad se maximiza ante la ineficacia de la declaración de parte de tomar el rol de la confesión judicial, eventualidad que podría significar el colocar en estado de indefensión mayor a aquella parte que, otrora, podía ver en la confesión judicial un arma ideal para la obtención de sus justas pretensiones.

La utilidad de la confesión judicial no es una cuestión que se asevera en este apartado por meras pretensiones del autor; es una realidad que ha sido defendida en el pasado en diferentes estudios. Uno de los más relevantes, por la claridad de su explicación, es el trabajo de Cedeño Yanes (2018), quien asegura que la confesión judicial puede ser de utilidad para la acreditación de hechos, cuestión que incluye a los procesos laborales (p. 195). El problema, continuándose con el mismo autor previamente citado, es que la confesión judicial no suele ser explotada de forma correcta por incompetencias de los patrocinadores de causa, lo que minó, con el paso del tiempo, la credibilidad de la utilidad de esta figura (Cedeño Yanes, 2018, p. 195).

Pero los problemas de utilización de la confesión judicial no pueden ser un motivo suficiente para reducir la figura en procesos tan importantes como son, por ejemplo, los procesos laborales. Debe tenerse en cuenta que los juicios laborales, según Núñez Landazuri (2009), por el desequilibrio de poder

entre las partes (empleador, por lo general, con mayor poder que el empleado), los empleados suelen ser los demandantes, por lo que el representante legal de la empresa suele tener el rol de demandado (p. 118). En esta clase de juicios, por el mencionado desequilibrio de poder, el demandante debería poseer todas las herramientas posibles para tratar de colmar sus pretensiones; esto incluye todos los medios de prueba que pudiese explotar. Al haberse eliminado la confesión judicial, en los procesos laborales se ha reducido las herramientas de acción de los empleados, normalmente demandantes, lo que les expone a mayores dificultades para alcanzar la justicia en las instancias correspondientes.

Si se considera que la prueba es un derecho específico enmarcado en el derecho a la defensa (Alcapio y otros, 2016, p. 160), resultaría evidente que la reducción de la confesión judicial de cualquier cuerpo legal no sería pertinente. La naturaleza jurídica de derecho que tendría la prueba, y por inducción la prueba que pueda emanar de la confesión judicial, haría que sea necesario su defensa y preservación dentro de los cuerpos legislativos. Esto se vuelve especialmente imperioso en los casos de Derecho Laboral, esto a raíz de la disparidad ya mencionada sobre el empleado y el empleador en términos de poder. Si se deslinda un medio de prueba cuyo uso común se asocia a los demandantes, y son los demandantes en el caso de los procesos laborales los propios empleados, ya de por sí en situación de desventaja, se les afectaría de forma negativa, propiciándose así la injustificada reducción de una figura que podría equilibrar un poco la situación ya de por sí comprometida para el empleado.

En este sentido, y como cierre parcial, se puede aseverar que, gracias a los fundamentos de hecho señalados a lo largo de esta sección, la confesión judicial, por su naturaleza jurídica de derecho y por su mutabilidad como fenómeno jurídico, requeriría preservarse como parte de cualquier normativa procesal, al menos, en situaciones de claro desequilibrio entre las partes como suele ocurrir en el Derecho Laboral. Estas bases permitirían pasar a los fundamentos de Derecho y, con ello, a la especificación del problema que se deseaba atender por medio de este trabajo: la pérdida de la figura de la confesión judicial en los procesos judiciales laborales en el Ecuador.

CAPÍTULO II.- FUNDAMENTO DE DERECHO

Identificación del problema

El problema jurídico que se decidió abordar en este trabajo correspondió al haberse desprendido la norma de procedimiento civil del Ecuador, el Código Orgánico General de Procesos, de la figura de la confesión judicial. Debido a que este problema podría ser analizado desde diferentes perspectivas, resultó pertinente realizar una delimitación del problema respecto a dos criterios: especialidad jurídica y derechos individuales.

Sobre la especialidad jurídica, el problema de la confesión judicial y su no existencia en el Código Orgánico General de Procesos se analizaría a la luz de la rama laboral del Derecho ecuatoriano. El Derecho Laboral en el Ecuador ha estado marcado por condiciones de desigualdad desde sus propios inicios, lo que llevó a que se creasen, desde la fundación de la república, algunas leyes que protegieran al trabajador (Irigoyen Arboleda, 2015, p. 32). No obstante, este problema de desigualdad se mantuvo con el paso del tiempo, algo que, si bien no es problema único del Estado ecuatoriano, igualmente merece ser atendido.

El problema principal de la mayoría de vicisitudes en las regulaciones laborales pasa por el hecho de estar el trabajador, en buena parte de los casos, en un estado de limitado poder de negociación con el empleador (Irigoyen Arboleda, 2015, p. 103). Esta desventaja, en el caso de litigios, debería ser solventada mediante las leyes laborales, por lo que cada herramienta a favor del empleado sería bien recibida, así como toda acción que pretenda reducir estas figuras jurídicas a favor del empleado debería ser, cuanto menos, rechazada.

El haberse quitado la figura de la confesión judicial en el nuevo Código Orgánico General de Procesos, se perdía con ella la posibilidad de que un empleado se viese beneficiado del reconocimiento de sus derechos por parte del propio empleador. Esto es así porque, como explica Gozaíni (2009) la confesión judicial debe entenderse como el reconocimiento de una de las partes sobre los hechos o sobre los derechos de quien demanda que se le reconozcan (p. 417). Así, al desprenderse esta figura del código

procedimental ecuatoriano, el empleado pierde la posibilidad de aprovechar este recurso para ayudar a resolver su causa incluso antes del juicio, lo que direccionaría la cuestión, desde las primeras instancias, a favor de la parte con mayores desventajas.

Sobre la cuestión de los derechos individuales, la confesión judicial formaba parte de los derechos que toda persona debe gozar al momento de defenderse. Alcapio y otros (2016) aseveran que el derecho a probar forma parte del debido proceso, en donde toda persona puede producir la prueba que considere necesaria para alcanzar sus pretensiones (p. 156). Si la confesión judicial era capaz de hacer prueba en los momentos previos al juicio a favor del accionante, y si esta confesión judicial era espontánea por parte del accionado, su desconsideración de un cuerpo legal no tendría mayor sustento, más cuando los beneficios de esta figura serían superiores que los alcanzados con su desestimación.

A lo anterior puede sumarse la interpretación de la confesión judicial como una forma de alcanzar una resolución más justa para el accionante e incluso más benevolente con el accionado (Andrade Castillo, 2013, p. 136). Si en un proceso laboral el empleador desea reconocer los hechos que se le achacan, no sería más que un acto justo espontáneo que beneficiaría al empleado y reduciría la complejidad del caso, lo que permitiría alcanzar una solución más expedita sobre lo acontecido. Esta es una muestra de cómo la confesión judicial, sea en el sistema judicial que sea (incluido el ecuatoriano), puede ser beneficioso en todos los casos, lo que también aplica para las eventualidades litigiosas de orden laboral.

Los dos criterios desarrollados, sumados al hecho de no haber posturas jurídicas sólidas contrarias a la confesión judicial siempre y cuando esta se realice de forma espontánea (Andrade Castillo, 2013, p. 137), demuestra que el haberse quitado la figura en el Código Orgánico General de Procesos representaría un problema de mantenimiento del nivel de derechos, al menos en lo laboral, relacionados con el debido proceso y el derecho a la prueba. Que no exista esta figura no podría interpretarse más que como un paso hacia atrás en la búsqueda de igualdad de oportunidades para el acceso a la justicia en los procesos laborales.

Causas del problema jurídico

De la revisión doctrinal-histórica del problema del deslindamiento de la confesión judicial del Código Orgánico General de Procesos se pudo constatar que no existe una explicación sobre las razones que llevaron a prescindir de esta figura al momento de la renovación del antiguo Código de Procedimiento Civil. No obstante, se pudo realizar algunas inferencias que bien podrían explicar la necesidad de quitar esta figura.

Una de las razones más evidentes pasó por lo explicado por Cedeño Yanes (2018), quien afirmó, haciendo alusión a la misma situación en el caso de Costa Rica, que esta figura se desechó a favor de la declaración de parte, última que resultaba más útil por integrar más cuestiones además de la confesión judicial. Específicamente, la declaración de parte podía englobar “no solo los hechos personales de quien rinde confesión, sino también los hechos de terceros o, mejor dicho, los que no le son personales” (Cedeño Yanes, 2018, p. 195). Esta excusa sería perfectamente aplicable en el caso ecuatoriano, dado que ocurrió lo mismo a nivel nacional: se prescindió de la confesión judicial a favor de la declaración de parte.

Más allá de la mayor flexibilidad de la declaración de parte, también se pudo haber optado por sacar del orden legal a la confesión judicial por cuestiones relacionadas con los vestigios de las normas poco ortodoxas del pasado. La confesión judicial podría ser comprendida como cercana a la figura de la autoincriminación, un elemento judicial que era propio del sistema judicial de la inquisición (Andrade Castillo, 2013, p. 137), muy criticado por demás. Esta cercanía a un sistema de confesiones casi obligadas por medio del uso de la violencia o las amenazas, pudo haber sido otra cuestión que llevase a los legisladores ecuatorianos a decidir sobre la eliminación de la confesión judicial y su reemplazo por la declaración de parte.

Aparte del rezago conceptual de la figura de la confesión judicial que pudo haber motivado su desintegración de la norma procesal, la incorrecta utilización de la confesión judicial pudo haber sido otra razón de peso. Según Núñez Landázuri (2009) un error común del abogado ecuatoriano correspondía a la formulación del pliego de posiciones, las cuales no se

adecuaban a los esperable de un interrogatorio por ser estas impertinentes, compuestas, sugestivas e incluso capciosas (p. 133). Si bien la autora no especificaba las especialidades del Derecho en donde esta situación se presentaba, resultaría pertinente creer la presencia de este problema en toda especialidad del Derecho, incluyendo la laboral. En casos similares al del Ecuador, como el de Costa Rica, Cedeño Yanes (2018) explicó:

Para nadie es un secreto que, en los procesos laborales, en muchas ocasiones, existen técnicas de litigio muy pobres en tanto se solicita prueba confesional de la parte adversaria sin explotar adecuadamente las bondades de la confesión judicial; es decir, se realizan interrogatorios sobre aspectos que son negados desde un inicio por la parte contraria. (p. 195)

Todos los elementos argumentales presentados en este apartado serían suficiente evidencia de las posibles causas del problema jurídico. Esto ha de tenerse en cuenta al momento del planteamiento de la solución de dicho problema para evitar recurrencia en los aspectos controversiales que llevaron a que la confesión judicial fuese desestimada de integrar el Código Orgánico General de Procesos en su momento.

Preguntas de investigación

Si se sintetiza todo lo presentado en la identificación del problema y la manera en la que se generó el problema jurídico, es posible concretar el propósito de la investigación en una única pregunta general. Esta pregunta sería la siguiente: ¿sería pertinente la reintegración de la confesión judicial al Código Orgánico General de Procesos como herramienta de defensa de los derechos laborales de los trabajadores? Con la finalidad de hacer más sencilla la resolución a esta pregunta, se dividió ésta en tres preguntas específicas, tal y como se muestra a continuación:

- ¿La reincorporación de la confesión judicial implicaría la desintegración de la declaración de parte en el Código Orgánico General de procesos?
- ¿Sería necesario limitar la confesión judicial al ámbito laboral en el propio Código Orgánico General de Procesos?

- ¿Cómo debería proponerse la reforma del Código Orgánico General de Procesos para la reincorporación de la confesión judicial?

Análisis del problema jurídico general

Si bien se reconoce que la declaración de parte fungió como suplente inmediato de la confesión judicial, esto no implicó una absorción plena de la utilidad de la segunda por parte de la primera, lo que terminó por generar una situación indeseada de vacío legal. Como explica Carbajal (2017) existe un vacío legal sobre la manera de aplicación de la declaración de parte que nace por dudas sobre la necesidad de juramentación, la claridad de sus reglas o la posibilidad del declarante para negarse a responder sobre lo consultado (p. 109). Esta clase de vacíos legales que el autor planteó como generales para el uso común dado de la declaración de parte son evidenciables en el caso ecuatoriano, algo que puede evidenciarse de manera tan sencilla como comparando las diferencias entre los cuerpos legales involucrados. No obstante, se adelanta que los vacíos legales en el caso del Ecuador son pocos, pero, aun así, importantes.

En el Código de Procedimiento Civil (2005) se daba un amplio tratamiento a la confesión judicial con reglas muy definidas, como la necesidad de rendirse ante el juez (art. 123), los requisitos para constatar su veracidad (art. 124) y la forma de contestación al pliego (art. 125). En este sentido, la confesión judicial se presentaba como una figura completa, bien delimitada y cuya utilidad radicaba, más allá del contenido propio de la confesión, en la recepción de esta por parte de un juez, validándose con ello su institución como prueba.

En el Código Orgánico General de Procesos (2021) la declaración de parte se mezcla con las declaraciones de terceros, restándose con ello el valor especial que la exposición de una de las partes debería tener (art. 174). Al ser una declaración, esta no posee un rango de confesión y por ende su valor probatorio quedaría en entredicho según los criterios del propio juzgador a la luz de lo expuesto. Finalmente, más allá que el declarante desee utilizar esta herramienta como una confesión, no podrá hacerlo sino hasta la audiencia de

juicio o segunda parte de la audiencia única (Código Orgánico General de Procesos, 2021, art. 188).

Otra cuestión que se pierde con la declaración de parte es su eficacia probatoria. Por lo enunciado en apartados anteriores se entendía a la confesión judicial como una declaración en contra del propio confesante para la que, por el valor probatorio de la misma al provenir de una de las partes, no era necesario recibir prueba en contra a esas confesiones personales. Tal cuestión se cimentaba en la obviedad de que, en teoría, nadie confiesa contra sí mismo al menos que esto sea verdad (Sanabria y Jiménez, 2018, p. 91). En la declaración de parte, al permitirse considerar a la parte declarante que testifica en propia contra como testigo hostil, este valor probatorio inexpugnable propio de la confesión judicial no se adhiere a la declaración de parte.

El vacío legal, entonces, ocurre cuando se desea presentar a la declaración de parte con un suficiente valor probatorio al nivel de la confesión judicial. Si la persona declarante en etapa de juicio asume su responsabilidad ante los hechos y esta declaración va en su contra, esta se trataría como una prueba testimonial más y, por ende, aplicarían sobre ella cuestiones como la del testigo hostil (Código Orgánico General de Procesos, 2021, art. 177.7). En este sentido, una declaración de parte en contra del propio declarante perdería total sentido al darse en audiencia de juicio en donde podría incluso ser refutada por el propio abogado del declarante. Tampoco se tendría ese grado de espontaneidad y oportunidad que se podía alcanzar con la confesión judicial al ser la declaración de parte una prueba inexistente e impracticable sino hasta la audiencia de juicio, donde el potencial confesante, por estar ya en el propio juicio, quizás pierda toda intencionalidad de realizar la confesión en cuestión.

Entonces, si la declaración de parte pierde la mayoría de elementos clave de la confesión judicial, como lo era la espontaneidad y su presencia anticipada a la audiencia de juicio, el valor de la confesión judicial no estaría presente realmente en la declaración de parte, lo que deja un vacío legal en el caso de que una de las partes desee confesar en su contra. Este vacío legal sería de tipo silencioso.

Bulygin (2002) afirmó que cuando el Derecho no es explícito respecto a una cuestión de la que se presume su existencia, esto puede declararse como un vacío legal o laguna jurídica (p. 104); a esto se le denomina vacío legal silencioso. El autor mencionado fue más allá y aseveró que todo aquello que no está explícitamente prohibido por lo jurídico estaría permitido por la misma cuestión jurídica y viceversa (Bulygin, 2002, p. 104). En este sentido, la existencia de la confesión judicial, ante la vaguedad de las exposiciones reglamentarias de la declaración de parte, sería posible; el problema radicaría que su aplicación sería interpretativa y aun así limitada por cuestiones como la oportunidad de la declaración judicial, lo que haría imposible que la confesión judicial se aplicase de manera plena por mera interpretación de su reemplazante.

Otro de los problemas de la declaración de parte es que evita la posibilidad de la existencia de una confesión de dos clases: la espontánea y la forzada. La confesión espontánea es aquella que se realiza por propia voluntad de quien confiesa, ello en las instancias previas al juicio, mientras que la segunda se sujeta a la presentación de la confesión forzada por la ley (Rodríguez García, 2021, pp. 21-22). En la declaración de parte, al presentarse fundamentalmente de forma exclusiva en la instancia de juicio, no tendría más que un carácter forzado, nuevamente perdiéndose con ello una de las ventajas ofrecidas por la confesión judicial y afectándose los derechos de la parte que podía salir beneficiada de ella.

Todo lo presentado hasta este punto permite consolidar la idea de que la declaración de parte no es un elemento suficiente que suplante la utilidad que se adjudicaba en el pasado a la confesión judicial. Ahora, esto no implicaría que la reincorporación de la confesión judicial implique la desintegración de los elementos básicos de la declaración de parte en el Código Orgánico General de Procesos, dado que se podría incluir la confesión judicial como elemento adicional a la declaración de parte.

Análisis del problema jurídico específico (laboral)

El problema jurídico, enfocado a lo laboral, tendría básicamente los mismos matices que el problema general, pero con un mayor valor al ser esta

clase de procesos, por lo general, desequilibrados en términos de poder. Este desequilibrio, como se explicó en las primeras instancias del trabajo, se debería a la posición de poder comúnmente ejercida por el empleador y la posición por lo general vulnerable del empleado que, a su vez, suele ser el demandante. En este sentido, los vacíos legales previamente señalados sobre la declaración de parte magnificarían sus consecuencias negativas en el caso del empleado demandante, quien carecería de la oportunidad de utilizar la confesión judicial como una prueba expedita para alcanzar sus pretensiones en las instancias legales.

Para ilustrar lo anterior, se tomó el caso presentado en la Sentencia No. 0425-2013-SL (2013) de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia del 28 de junio de 2013. En este documento se siguió el caso de un empleador que, en instancias previas, había sido condenado al pago de indemnización por despido intempestivo a su empleado, dado que se había negado a pagarle. El empleador decidió interponer un recurso de casación para que se anulase lo actuado por considerar que su confesión judicial ficta no fue válidamente analizada, es decir, que carecía de valor probatorio y que, por ello, no debía haber procedido la resolución afirmando el despido intempestivo.

Gracias a la existencia de la confesión judicial y sus reglas, se demostró en la ratio decidendi que en primera instancia se hizo un análisis correcto de la confesión judicial ficta y, por ende, el despido intempestivo ciertamente existió (Sentencia No. 0425-2013-SL, 2013). Por supuesto, para que la confesión judicial ficta procediese como lo hizo, esta debió ser presentada atendiendo a los requisitos legales básicos: preguntarse únicamente por los hechos controvertidos y que la formulación de las preguntas no fuese causante de contravenciones a la ley.

En este sentido, de no haber existido para aquel caso la figura de la confesión judicial, el empleado quizás no habría podido defenderse adecuadamente de su empleador a través de la confesión judicial ficta de este último actor mencionado. Si este caso se presentase en la actualidad, bajo la figura de la declaración de parte, quizás el resultado habría sido distinto por la imposibilidad de generar un valor probatorio inmediato sobre el empleador

accionado antes del juicio, lo que, naturalmente, reduciría las herramientas de defensa de las que dispondría el empleado, ya de por sí en situación de desventaja en tales casos.

Si bien se debe reconocer que el uso en el pasado de la confesión judicial era recurrentemente infructífero, sobre todo por su falta de motivación al solicitarla y por ser utilizada como medio de intimidación (Yépez Garcés, 2015, p. 105), esto bien podría achacársele a un uso más bien indebido del recurso en cuestión por parte de los accionantes más que por su inutilidad o impertinencia.

Resultados como el de la sentencia presentada anteriormente demuestra la utilidad de la confesión judicial cuando esta se presenta de manera pertinente, por lo que su desestimación en el Código Orgánico General de Procesos respondería más a una cuestión de economía procesal que por no ser una figura valedera. Esto, en tal sentido, deberá considerarse ante una potencial propuesta de reforma al código mencionado en este mismo párrafo para que se eviten tales situaciones de abuso indebido del recurso no sólo en lo laboral, sino también en general. Esto sería fundamental al considerarse que la norma procedimental del Ecuador no se limita a lo laboral y que, por ende, cualquier reforma propuesta deberá ser compatible con cualquier tipo de ámbito civil en donde se pueda practicar. No obstante, sí sería posible establecer ciertas cuestiones específicamente direccionadas a la materia laboral.

Propuesta de solución del problema jurídico

Por todo lo analizado y presentado en los apartados previos, es posible determinar como la solución más óptima para el presente caso la reforma del Código Orgánico General de Procesos para la inclusión de la confesión judicial. La confesión judicial, en esta propuesta, no suplantaría a la declaración de parte, sino que se expondría como una transformación de esta última que permita obtener los beneficios propios de la confesión judicial; es decir, la reforma sería una propuesta de coexistencia entre la confesión judicial y la declaración de parte, donde la primera quedaría supeditada a la segunda.

Aclarado esto último, se procede a exponer la reforma al Código Orgánico General de Procesos bajo los breves considerandos que se presentan a continuación:

Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos

Considerando

Que, el artículo 76, numeral 7, inciso 8 de la Constitución de la República del Ecuador establece que todas las personas tienen derecho a la defensa como parte del debido proceso, lo cual incluye la presentación de las pruebas que considere necesarios;

Que, el artículo 133 demanda la denominación de las leyes como orgánicas cuando estas regulan derechos y garantías constitucionales;

Que, el artículo 2 del Código Orgánico General de Procesos se rige bajo los principios previstos en la Constitución de la República del Ecuador y los derechos humanos;

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, se expide el siguiente documento bajo la denominación:

Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos

Artículo 1.- Refórmese el artículo 187 del Código Orgánico General de Procesos de la siguiente manera:

1. Sustitúyase el primer párrafo por el siguiente: “Declaración de parte es el testimonio acerca de los hechos controvertidos, el derecho discutido o la existencia de un derecho rendido por una de las partes. En el caso de actos preliminares, la declaración de parte podrá realizarse mediante la respuesta a un pliego de posiciones presentado por la parte contraria”.
2. Añádase como tercer párrafo el siguiente: “Cuando la declaración de la parte llamada a declarar resulta en el reconocimiento de la verdad de los hechos o en el reconocimiento de la existencia de un derecho, siendo ello contrario a los intereses del propio declarante, se reconocerá la confesión realizada como una confesión judicial”.

3. Añádase como cuarto párrafo el siguiente: “La confesión judicial sólo podrá constituirse como una prueba cuando esta cumpla con los siguientes requisitos: que la declaración sea la respuesta a un pliego de posiciones previamente avalado por el juez; que la declaración se haga ante el juez competente respecto al caso y que cada punto contestado haga referencia explícita a los hechos; que las respuestas sobre los hechos incluyan afirmaciones o negaciones sobre la veracidad de estos de manera clara, sin ambigüedades o evasiones; que el declarante se encuentre asistido por un abogado defensor al momento que haga la declaración, sea este un abogado de contratación privada o asignado por el Estado; que el declarante presente juramento respecto a la veracidad de lo que declara ante el juez; que la declaración se dé en el lugar, día, mes, año y hora pautados por el juez; que el declarante esté en pleno uso de sus facultades y sea mayor de edad”.
4. Añádase como quinto párrafo el siguiente: “El pliego de posiciones podrá ser corregido una única vez por el abogado patrocinante que ha diseñado el pliego. Si en la segunda presentación del pliego se observan inconsistencias respecto a las preguntas formuladas, se anulará la diligencia y no podrá solicitarse nuevamente como acto preliminar”.
5. Añádase como sexto párrafo el siguiente: “En el caso de materia laboral, cuando el empleador no asista a dar su declaración como parte de los actos preparatorios pese a ser notificado oportunamente sobre ello, se considerará que la inasistencia constituye una confesión ficta del empleador que afirma todo lo que se pretendía interrogar. La confesión ficta sólo podrá considerarse como tal cuando las preguntas del pliego de posiciones sean constitucionales y que se refieran exclusivamente a la materia objeto del litigio”.
6. Añádase como séptimo párrafo el siguiente: “No se podrá considerar como confesión ficta a la inasistencia justificada del empleador”.

Artículo 2.- Refórmese el artículo 188 del Código Orgánico General de Procesos de la siguiente manera:

1. La declaración de parte se podrá practicar como acto preparatorio, en la audiencia de juicio o en la segunda fase de la audiencia única.

Artículo 3.- Refórmese el artículo 191 del Código Orgánico General de Procesos de la siguiente manera:

2. Sustituir el título del artículo por el siguiente: “Artículo 191 – Notificación de la o del testigo y de la parte declarante”.
3. Añádase como segundo párrafo el siguiente: “En el caso de diligencia de declaración de parte como acto preliminar, la parte llamada a declarar será notificada con tres días de anticipación a la diligencia. En la notificación se le advertirá la obligación de declarar y se le prevendrá sobre que, de no hacerlo y no dar justificación por su ausencia, se podrá considerar su actuación como confesión ficta sobre el pliego de posiciones”.
4. Añádase como tercer párrafo el siguiente: “En el caso de recibirse justificación de inasistencia a la declaración de parte para el acto preliminar dentro del plazo de la primera notificación, el juez volverá a fijar una nueva y última fecha para la diligencia, notificando de ello a la parte llamada a declarar”.

Disposición transitoria

Una vez que entre en vigencia la presente ley reformativa, los procesos regulados por el Código Orgánico General de Procesos pasarán a sujetarse a las disposiciones de esta reforma, prestándose especial atención a su aplicación por favorabilidad en los casos que apliquen.

Disposición final

Las disposiciones que se presentan en la Ley Orgánica Reformativa al Código Orgánico General de Procesos entrarán en vigencia a partir del momento de su publicación en el Registro Oficial del Ecuador.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de agosto de dos mil veintidós.

CONCLUSIONES

- A raíz de todo lo presentado en este trabajo, se pudo llegar a una serie de conclusiones relacionadas con las preguntas de investigación y los hallazgos adicionales.
- Sobre la pregunta general de investigación, se demostró la pertinencia de reintegrar la confesión judicial al Código Orgánico General de Procesos como una herramienta adicional para la defensa de los trabajadores en procesos laborales. Esta pertinencia se cimentó en tres argumentos básicos ampliamente sustentados en el cuerpo del trabajo y que aquí se sintetizan: la reintegración de la confesión judicial puede lograrse sin que se deba prescindir de la figura de la declaración de parte; la reintegración puede hacerse de manera general para todos los procesos civiles en el Ecuador, más allá que ciertos aspectos, como la confesión ficta, puedan restringirse a lo laboral; la reintegración implicaría una reforma parcial del Código Orgánico General de Procesos siempre que se supedite la figura de la confesión judicial a la de la declaración de parte.
- Pese a que la solución teórica se presentó como factible, pertinente y viable, esta depende de la correcta motivación, una que, como se pudo evidenciar gracias al abordaje doctrinal, no carecería de fundamentos gracias al apoyo que diversos tratadistas han ofrecido a la figura de la confesión judicial. Esta motivación no sólo resultaría posible para estructurar la pertinencia de la confesión judicial para el ámbito laboral, sino también para el Derecho Procesal ecuatoriano en general. Por supuesto, se debería tener en cuenta las limitaciones halladas sobre la figura de la confesión judicial, como su incorrecta utilización por parte de los abogados patrocinadores.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda estudiar la reforma al Código Orgánico General de Procesos propuesta en este trabajo como una solución material para la reintegración de la confesión judicial a la ley procesal ecuatoriana. Si bien la estructuración de la reforma resultó adecuada en términos doctrinales y legales, se debe analizar con mayor profundidad la viabilidad y practicidad de esta reforma, en especial a la luz de su utilización en cualquier tipo de procedimiento de orden civil. Esta evaluación a profundidad podría alcanzarse a través de un estudio cualitativo que analice la reforma propuesta según el análisis crítico de diversos expertos en el ámbito del Derecho Procesal.

REFERENCIAS

- Aboslaiman, L. (2018). Teoría social contemporánea: los fenómenos jurídicos. *I Congreso Nacional de Ciencias Sociales*. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. <https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/15589/Teoria-social-contemporanea-los-fen-menos-juridicos.pdf?sequence=1&isAllowed=>
- Alcapio, J., Collao, N., Díez, A., Grisolia, C., López, J., Meneses, K., Quaas, A., Quiroga, C., Pérez, N., y Vásquez, P. (2016). La prueba. Un derecho de la defensa y una carga del Ministerio Público. *Iudicium*(1), 151-171.
- Alvarado Velloso, A. (2009). *Sistema Procesal, Tomo II Garantía de la libertad*. Rubinzal-Culzoni Editores.
- Andrade Castillo, X. (2013). Consecuencias jurídicas de los derechos del procesado derivadas de su operatividad constitucional. *Iuris Dictio*, 13(15). <https://doi.org/https://doi.org/10.18272/iu.v13i15.719>
- Benavente, D. (2004). *Derecho Procesal Civil*. Editorial Jurídica.
- Bernad Segarra, L. (2021). Sobre el valor de la confessio in iure certae pecuniae. Especial mención a su recepción en furs y les customs de Tortosa. En *Derecho procesal romano* (pp. 1275-1290). Universidad de Valencia.
- Bulygin, E. (2002). El silencio del derecho. *Análisis filosófico*, 22(2), 103-114.
- Carbajal, F. (2017). La paradoja 8.1. El "derecho a ser oído" en los procesos civiles reformados. *Litigación y sistema por audiencias*, 17(21), 104-111.
- Cedeño Yanes, A. L. (2018). La confesión judicial de cara a la reforma procesal laboral. *Revista Judicial, Poder Judicial de Costa Rica*(125), 193-201.
- Código de Procedimiento Civil, Registro Oficial 58 de 12 de julio de 2005 (Congreso Nacional del Ecuador 2005).

- Código Orgánico General de Procesos, Registro Oficial 506 de 22 de mayo de 2015 (Asamblea Nacional de la República del Ecuador 29 de noviembre de 2021).
- Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008 (Asamblea Nacional Constituyente 25 de enero de 2021).
- Fairén Guillén, V. (2004). *Sobre la historia del juicio sumario ejecutivo en Valencia: La ordenació del Rey Don Martín I de 1403*. Universitat de València.
- Fernández González, J. (1999). *Tratado elemental de Derecho Romano*. Editorial Porrúa.
- Foucault, M. (2014). *Obrar mal, decir la verdad: Función de la confesión en la justicia*. Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
- Gozáini, O. (2009). *Tratado de derecho procesal civil, Tomo IV Prueba-Alegatos-Conclusión de la causa-Sentencia*. Editorial La Ley.
- Irigoyen Arboleda, J. J. (2015). *Redefinición de la relación protegida por el derecho del trabajo ecuatoriano*. Universitat de Valencia.
- Núñez Landázuri, L. (2009). *La confesión judicial en el proceso oral laboral*. Universidad Andina Simón Bolívar.
- Rodríguez García, I. D. (2021). Confesión espontánea en el emplazamiento en materia civil. *Revista de Investigaciones Universidad del Quindío*, 33(S2), 18-23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33975/riuq.vol33nS2.606>
- Sanabria, R., y Jiménez, J. (2018). La declaración de parte como medio de prueba en el derecho procesal civil iberoamericano. Aportes para su estudio en el código general del proceso colombiano. *Revista Academia & Derecho*, 9(16), 67-102.
- Sánchez Moreno, C. (2013). Lex Rubria. En *Encyclopedia of Ancient History* (pp. 1-2).

Sentencia No. 0425-2013-SL, Expediente 1171-2010 (Sala de Lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia 28 de junio de 2013).

Vásconez, C. (2020). *La Declaración de parte en el Código Orgánico General de Procesos*. Universidad Andina Simón Bolívar.

Yépez Garcés, D. (2015). *Trasplante de la práctica de prueba testimonial civil adversarial al Ecuador*. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.



DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, Robalino Cueva, Johan Sebastián, con C.C: # 0932133358 autor del trabajo de titulación: **Propuesta de reforma del Código Orgánico General de Procesos para reincorporar la confesión judicial como herramienta de defensa de los derechos laborales de los trabajadores**, previo a la obtención del título de **ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, a los 04 días del mes de septiembre del año 2022

f. _____

Nombre: **Robalino Cueva Johan Sebastian**

C.C: **0932133358**



REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA			
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN			
TEMA Y SUBTEMA:		Propuesta de reforma del Código Orgánico General de Procesos para reincorporar la confesión judicial como herramienta de defensa de los derechos laborales de los trabajadores.	
AUTOR(ES)		Robalino Cueva Johan Sebastián	
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)		Castro Chiriboga, Fernando Guillermo	
INSTITUCIÓN:		Universidad Católica de Santiago de Guayaquil	
FACULTAD:		JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS	
CARRERA:		DERECHO	
TITULO OBTENIDO:		ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	
FECHA DE PUBLICACIÓN:		4 de septiembre del 2022	No. DE PÁGINAS: 27
ÁREAS TEMÁTICAS:		Legislación, Derecho Procesal, Problemas Sociales	
PALABRAS CLAVES/KEYWORDS:		Derecho Laboral, Trabajadores, Doctrinas, Código de Procedimiento Civil, Código Orgánico General de Procesos, Confesión Judicial, Reformas	
RESUMEN: <p>El trabajo tuvo como finalidad proponer una reforma al Código Orgánico General de Procesos para la reincorporación de la confesión judicial como herramienta de defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Esto se justificó por el hecho de la desaparición de la institución de la confesión judicial a partir del año 2015 cuando se derogó el Código de Procedimiento Civil. El estudio se presenta, aparte de como una propuesta de reforma a una normativa tan importancia como lo es el Código Orgánico General de Procesos, como una novedad dentro de los estudios académicos en la rama del Derecho Laboral por pretender dar pertinencia a la inclusión de la confesión judicial sin provocar por ello la desaparición de la declaración de parte, figura que desde el 2015 funge como sustituto de la mencionada confesión. Luego del análisis de doctrina, ley y jurisprudencia se pudo demostrar la pertinencia de una reforma que permita que la figura de la confesión judicial nazca a partir de ciertas especificidades en la ejecución de la declaración de parte.</p>			
ADJUNTO PDF:		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
CONTACTO CON AUTOR/ES:		Teléfono: +593-4-0956847329	E-mail: Johan.robolino@cu.ucsg.edu.ec
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::		Nombre: Ab. Toscanini Sequeira Paola María, Msc. Teléfono: +593-999570394 E-mail: paola.toscanini@cu.ucsg.edu.ec paolats77@icloud.com	
SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA			
Nº. DE REGISTRO (en base a datos):			
Nº. DE CLASIFICACIÓN:			
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):			